

Distr.
RESTRINGIDA

LC/R.716
28 de noviembre de 1988

ORIGINAL: ESPAÑOL

C E P A L

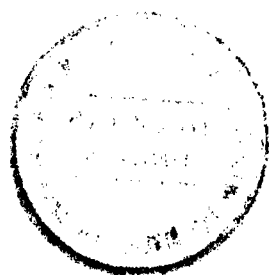
Comisión Económica para América Latina y el Caribe

COLOMBIA: CRISIS SOCIAL Y OPCIONES
PARA EL FUTURO */

*/ Esta contribución del señor Antonio J. Urdinola fue presentada al Seminario sobre Opciones de Desarrollo Social para los Años Noventa (San José, Costa Rica, 15 al 18 de noviembre de 1988). Las opiniones expresadas en este estudio son de la exclusiva responsabilidad de su autor y pueden no coincidir con las de la Organización.

Este documento no ha sido sometido a revisión editorial.

88-11-1724



Indice

	Página
1. Equidad y desarrollo social en Colombia...	1
2. Las causas de la inequidad.....	5
a) La migración al exterior.....	7
b) El trabajo informal.....	8
c) El empleo público.....	9
d) El narcotráfico y otras organizaciones delictivas.....	10
e) Los grupos guerrilleros y los activistas de izquierda.....	11
3. Los orígenes de la violencia.....	11
4. La política actual contra la violencia....	15
5. Una opción para los años noventa.....	19

"Reducir la preocupación por la equidad al ámbito de la política social implica no comprender su verdadera na turaleza e impedir la solución de sus problemas a largo plazo".

CEPAL

1. Equidad y desarrollo social en Colombia

Ninguna noción tan difícil de precisar como la de equidad; sin embargo es el pilar sobre el cual debe basarse una política de desarrollo social, entendido éste como referido a las características de la población en materias tales como educación, salud, distribución del ingreso, y de la propiedad de los bienes materiales, empleo, acceso a los servicios sociales, pobreza, etc.

Por definición equidad es un concepto subjetivo y que podríamos describir como la noción que tienen distintos grupos humanos dentro de un país sobre lo adecuado de las características sociales del proceso de desarrollo que allí se realiza. Desde ese punto de vista, es perfectamente posible que exista un mejoramiento significativo de los indicadores sociales en áreas como la educación, la salud, la vivienda, la pobreza, y que simultáneamente se incremente la sensación de inequidad, medida en términos de la agudización de los choques y conflictos entre diferentes grupos de una nación.

El caso colombiano en los últimos cuarenta años es un ejemplo muy claro de cómo una mejora sustancial en los indicadores sociales puede venir acompañada de una aceleración de conflictos y de violencia de todo tipo, síntomas claros

de una creciente frustración entre diversos segmentos de la población con los efectos sociales del desarrollo económico logrado, y que han llevado al país a una crisis social de enorme magnitud.

En la actualidad, Colombia tiene la triste condición de ser uno de los países no beligerantes con más altas ta sas de criminalidad en el mundo; el asesinato, el secuestro, la extorsión, el terrorismo económico, han alcanzado en el país niveles que amenazan con precipitarlo a un estado de descomposición cuyo resultado eventual sería la destrucción de su régimen democrático y su reemplazo por una dictadura de algún tipo, que imponga por la fuerza de las armas un orden social en el país.

Lo paradójico del caso colombiano reside en que los indicadores sociales muestran un progreso notable durante estos últimos cuarenta años . La expectativa de vida al nacer pasó de 42 años en 1950 a 63 años en 1985; la poblaci ón de más de 5 años con ninguna educación formal disminu yó del 50% en 1951 al 17% en 1985; aquella con educación secundaria aumentó del 5.5% al 26%, y la de educación uni versitaria del .5% al 4.4%. En 1951 solamente el 29% de los hogares tenía instalación de agua, contra un 70.5% en 1985; de alcantarillado sólo disponía un 21% de los hogares en 1951 contra un 60% en 1985, y de electricidad los

porcentajes respectivos fueron del 29 y el 79%. Como resul
tado de la mejora en los indicadores sociales, M. Carrizo
sa estimó recientemente que tomando una línea de pobreza ab
soluta constante, un 64% de la población colombiana estaba
por debajo de ella en 1951, mientras que en 1981 solamente
un 38% de la población quedaba en dicha situación. Debe re
conocerse, sin embargo, que aún con las mejoras anotadas, los
indicadores sociales de Colombia siguen siendo inferiores a
los de los siete mayores países de América Latina.

Durante el período atrás mencionado, Colombia logró
mantener una tasa de crecimiento del PIB per capita del or
den del 2% anual, que le permitió doblar su nivel en esta
materia de 700 dólares a 1.400 dólares entre 1950 y 1986
(dólares de 1986). El grado de urbanización pasó del 40%
a casi el 70% durante los últimos 40 años, lo que facilitó
la extensión de los servicios sociales a buena parte de la
población, ampliándose el diferencial en éstas áreas entre
los habitantes de la ciudad y el campo. Aunque el creci-
miento económico de Colombia ha sido el normal para países
de ingreso mediano en la etapa de la postguerra, y muy simi
lar al promedio de las naciones latinoamericanas, ha tenido
como característica casi única en esta región del mundo su
estabilidad derivada, en el fondo de la debilidad históri
ca de un Estado obligado a transar permanentemente con gru

pos privados y regionales sus políticas económicas y sociales, lo que impide cambios abruptos en éstas. Colombia ha logrado mantener un crecimiento continuado de su ingreso per capita, evitando tanto súbitas aceleraciones como fuertes recesiones de su economía. Durante la crisis de los años ochenta, Colombia ha sido el país latinoamericano con menor acumulación de deuda social, según PREALC, gracias en parte al mejor manejo del endeudamiento externo.

A diferencia también del resto de América Latina, Colombia ha podido preservar en los últimos cuarenta años un régimen político de democracia representativa con un breve interludio, la dictadura de Rojas Pinilla entre 1953 y 1957. Las libertades políticas, con todo y las limitaciones que impuso el experimento del Frente Nacional en materia de paridad en los cargos públicos y alternación de la Presidencia de la República por los dos partidos políticos tradicionales, han sido suficientes para permitir la existencia de movimientos de oposición y de su participación en los procesos electorales con un mínimo de garantías. Los dos partidos tradicionales de carácter policlasista y regionalizado, siguen representando en la actualidad cerca del 95% de los votos depositados en las elecciones presidenciales, pese al intenso esfuerzo de los movimientos de izquierda para obtener un papel en los cuerpos representativos nacionales.

La pregunta obvia que se hace cualquier observador de la realidad colombiana es, entonces, de dónde provienen la amargura e insatisfacción de una serie de sectores de la población con el orden social del país, y por qué la selección de medios violentos para modificarlo, existiendo como los hay una serie de canales institucionales permanente y crecientemente abiertos para la expresión del descontento político? Las respuestas que se ofrezcan muy claramente serán de carácter subjetivo; en las siguientes páginas trataré de presentar una interpretación personal de los orígenes de la sensación de inequidad que afecta a grupos claves de la sociedad colombiana y de por qué han optado por la violencia como manera de modificar el esquema de desarrollo social del país.

2. Las causas de la inequidad

Es difícil encontrar un país del tercer mundo donde simultáneamente se haya observado una mejoría tan sustancial de la estructura educativa de la población con la permanencia de una distribución del ingreso tan altamente concentrada como la colombiana. En el primer capítulo de este ensayo anotábamos cómo en 1951 el 41% de la fuerza de trabajo no tenía ninguna educación formal y sólo el .9% había llegado a la universidad, al paso que en 1985 esas proporciones se habían modificado a 11.5% y 7.7% respectivamente. Esta varia

ción de la pirámide educativa fué mucho mayor que la que se observó en la distribución del ingreso. En 1951 el 10% más rico de la fuerza de trabajo recibía alrededor del 52% del ingreso total, mientras que el 20% más pobre obtenía cerca del 2.8% del ingreso. En 1972 estas proporciones fueron de 49% y 3%, respectivamente. Aun aceptando que haya existido algún mejoramiento de la distribución del ingreso entre 1972 y 1985, ello no ocurrió en una magnitud que pueda ni remotamente compararse con los cambios atrás mencionados en la distribución de la educación formal. Peor aún, los estudios recientes de la Misión de Empleo dirigida por el Profesor Chenery indican que el diferencial de salarios entre la mano de obra no calificada y aquella con educación secundaria y superior disminuyó a lo largo del período, de tal manera que la tasa de retorno de las fases más avanzadas de la educación formal se disminuyó. Por tanto, la estabilidad o inclusive mejora del Gini global esconde una disminución de la participación de la clase media, en favor de los grupos de ingresos más bajos, principalmente. Adicionalmente, los estudios de pobreza indican que la brecha social entre las áreas urbanas y las rurales se ha venido ampliando hasta el punto de estimarse en más de 30 años el retraso de las segundas con respecto a las primeras.

Puede afirmarse, entonces, que al paso que Colombia hizo un gran esfuerzo de inversión en capital humano en los últimos cuarenta años, que le permitió mejorar la calidad educacional de su fuerza de trabajo, no logró simultáneamente desarrollar fuentes de empleo calificado en cantidad suficiente para recibir el volumen creciente de graduados de sus colegios de secundaria y de sus universidades, lo que los obligó a aceptar niveles de remuneración insatisfactorios por comparación a los devengados por mano de obra no calificada o con solamente unos pocos años de educación primaria en su haber. Si definimos a la clase media en términos del nivel de educación formal, o sea aquella con estudios de secundaria o universidad, podría resumirse la fuente básica del descontento colombiano como la sensación de frustración de su clase media por no poder encontrar un nivel de ingresos compatible con las expectativas a que su educación la hace aspirar.

El descontento de la clase media colombiana ha tenido hasta la fecha varias avenidas de escape:

a) La migración al exterior

En los últimos cuarenta años se calcula que no menos de un millón y medio de colombianos han salido a buscar fortuna al extranjero, principalmente a Venezuela, Estados

Unidos, Ecuador y Panamá. Especialmente intensa ha sido la migración de fuerza de trabajo con educación secundaria y profesional a los Estados Unidos, mientras que la que se ha dirigido a los demás países tenía un menor nivel de calificación.

b) El trabajo informal

En Colombia como en el resto de América Latina, ha venido proliferando el trabajo informal de las personas con educación media y superior, que antes era una característica principalmente de los grupos menos calificados de la población. Profesionales independientes, microempresarios, trabajadores por cuenta propia, han venido floreciendo y creando alternativas que el sector moderno de la economía no está en condiciones de ofrecer en cantidad suficiente a una fuerza de trabajo crecientemente calificada. La informalización de la economía ha tenido otro efecto: obliga a modificar radicalmente todo el esquema de relaciones entre el capital y el trabajo.

El modelo básico de estas relaciones se desarrolla en Antioquia, cuna industrial del país, en la década de los 40, y se basa en que a través de la empresa el trabajador se vincula a la seguridad social del Estado, y por medio del sindicato obtiene una capacidad de negociación

frente a la empresa en toda una serie de aspectos vitales.

La informalización de la economía impide que un número creciente de la fuerza de trabajo se pueda vincular a la seguridad social, en su esquema tradicional, y debilita al movimiento sindical, que de cobijar al 15% de la fuerza ocupada en 1960 ha bajado al 8% en 1988.

De allí la urgencia de replantear los esquemas de seguridad social y de organización de los "informales", a través de esquemas de tipo solidario que se adecúen a la nueva estructura de la economía, para complementar al modelo tradicional basado en la empresa "formal".

En conclusión, puede afirmarse que se presenta una seria disparidad entre la voluntad del país para educar su fuerza de trabajo y su posibilidad de ofrecerle un número suficiente de empleos adecuadamente remunerados y productivos, lo que está generando una insatisfacción creciente de las clases medias, que se manifiesta no sólo en Colombia sino en toda América Latina en serios síntomas de descomposición social.

c) El empleo público

Cerca del 50% de la población universitaria del país se halla al servicio del Estado colombiano en sus dis

tintos niveles nacional, departamental y municipal, pese a que éste no ocupa más del 12% de la fuerza de trabajo nacional. Dado el carácter clientelista del empleo público colombiano, donde se busca maximizar el número de "clientes" más bien que su remuneración individual, es claro que solamente los menos ambiciosos de los profesionales permanecen largo tiempo al servicio del Estado, con sus bajas remuneraciones relativas a las que paga el sector privado, reduciéndose así la calidad de la administración pública e incentivándose su corruptibilidad. Ello a su vez ha permitido la proliferación de centros de educación superior de baja calidad, cuyo mercado natural es el servicio público clientelizado.

d) El narcotráfico y otras organizaciones delictivas

De todo el mundo es conocido el tamaño e importancia de las organizaciones de narcotraficantes colombianos, dirigidas y sustentadas en la clase media y media baja nacionales, según la definición que de ellas dimos en términos educativos, y que encontraron en los amigos y parientes emigrados a los Estados Unidos una red natural de distribución. Igualmente han proliferado los grupos de contrabandistas, secuestradores, extorsionistas, asaltantes, estafadores de cuello blanco, etc., integrados todos ellos por

personas generalmente con educación superior al promedio nacional.

Algunos estudios indican que el sector narcotráficante le aporta al país US\$ 750 millones anuales en la actualidad , y ocupa directa o indirectamente un 2% de la PEA. No hay duda que ello ha influido en disminuir el impacto de la deuda externa en Colombia.

- e) Los grupos guerrilleros y los activistas de izquierda

Es bien conocido que la cúpula de los movimientos guerrilleros, lo mismo que de las organizaciones políticas, intelectuales y sindicales de izquierda, lo constituyen miembros de las clases medias desafectos con el sistema social colombiano y decididos a cambiarlo por uno u otro mecanismo.

3. Los orígenes de la violencia

Si bien la frustración de las clases medias es un fenómeno generalizado en América Latina en la década de los ochenta, por razones vinculadas a la desaceleración del crecimiento económico, falta entender por qué en el caso colombiano el descontento adquiere características tan violentas, sólo comparables a las que últimamente se están observando en el Perú.

A mi entender, ello se deriva inicialmente de la larga tradición de país de fronteras internas que ha tenido Colombia. El fenómeno colonizador ha sido una constante en los dos últimos siglos de vida del país, primero sobre el lomo de las cordilleras y luego gradualmente con el descenso hacia las tierras más cálidas a medida que se fueron agotando las posibilidades de expansión en las más elevadas. Este largo proceso de colonización se ha caracterizado por el conflicto social permanente entre los colonos que abren las nuevas tierras y los comerciantes detrás de ellos que les financian el proceso de apertura y que, eventualmente, se quedan con las tierras recién explotadas, en un proceso de acaparamiento que posteriormente genera grandes fortunas cuando a través de la inversión del Estado llegan a las nuevas regiones las carreteras, la energía y las demás obras de infraestructura. La explotación del colono por el comerciante ha sido la semilla tradicional del conflicto social en las zonas de frontera, y en ese crisol se ha forjado buena parte de la población que posteriormente ha emigrado con sus hijos a los centros urbanos en búsqueda de mejores condiciones de vida y de mayores oportunidades de educación para su familia. El Estado nunca ha podido mantener una presencia importante en las zonas de colonización, que le permita mejorar las condiciones de vida del colono y limi

tar los abusos de intermediarios y comerciantes en materia de precios de productos básicos, condiciones de financiación, salarios, etc. A mi entender, entonces, existe desconfianza de buena parte de la población colombiana con ancestro colonizador, especialmente aquella de los grupos antioqueños y santandereanos, en la capacidad del Estado y sus instituciones para dar una solución adecuada a lo que perciben como situaciones sociales injustas. De allí la facilidad con que el pueblo colombiano recurre a la violencia como solución a los problemas nacionales, agravada por la inoperancia de los mecanismos institucionales de la justicia para resolver los conflictos, derivada de su "clientelización" por una clase política profesional que deriva su poder electoral del manejo de las rentas y puestos públicos. La efectividad del control electoral por la clase política profesional, aliada a los grupos empresariales que manejan y financian los medios de comunicación de masas, ha derrotado hasta ahora los intentos de los partidos de izquierda para obtener una representación significativa en los cuerpos legislativos del país, lo que ha motivado la búsqueda de alternativas de lucha inspiradas en los modelos cubano y chino.

Las luchas sociales en las zonas de frontera agrícola del país explican también lo extendido y virulento del fenómeno guerrillero en Colombia. Las clases medias de origen

urbano deseosas de un cambio en el sistema social por mé todos violentos, encuentran en las zonas de frontera un campesinado explotado y falto de toda protección por el Es tado y que da su apoyo a los cuadros revolucionarios cuando éstos meten en cintura a los comerciantes y acaparadores de tierra, y ofrecen las funciones de orden y protección que le deberían corresponder al Gobierno.

La falta de control y apoyo estatal en las vastas regio nes de frontera agrícola del país permitieron también que allí se implantara el cultivo de la marihuana y de la coca bajo lo protección de la guerrilla, que de esta manera encon tró una fuente estable y sumamente importante para su finan ciamiento. Simultáneamente los mecanismos de contrabando di señados por el narcotráfico para llevar al exterior la dro ga, han servido también para suministrar a la guerrilla las armas y demás implementos bélicos que han facilitado la rá pida expansión de su pié de fuerza en la última década.

El fenómeno del narcotráfico a su vez genera su propia violencia, como es de todos conocido, dadas las rivalidades y conflictos entre grupos de mafiosos, que no pueden diri mirse de otra manera. Peor aún, los cuerpos de sicarios de sarrollados por los narcotraficantes colombianos como fuer zas internas de seguridad y represalia, terminaron volvién dose grupos paramilitares de derecha dirigidos a atacar po

líticos de izquierda, líderes sindicales, simpatizantes de la guerrilla, etc., cuando la inversión en tierras de las utilidades del narcotráfico volvió a los mafiosos un blanco codiciable para la extorsión y el secuestro por parte de grupos guerrilleros en busca de financiación. El fenómeno del desplazamiento del hacendado tradicional de las zonas de frontera por el narcotraficante con ejército privado es cada vez más generalizado en el país, ante la incapacidad del primero para resistir el acoso de los grupos guerrilleros que generalmente operan en esa región, en las cuales el Estado no tiene la capacidad suficiente para garantizar la ley y el orden. Todo ello constituye un fuerte agravante a las semillas tradicionales de violencia en la sociedad colombiana, que como hemos dicho se derivan de su carácter de país de fronteras en permanente conflicto.

4. La política actual contra la violencia

La combinación atrás descrita de luchas agrarias, clases medias frustradas, y narcotráfico, unidas con la politización clientelista del aparato estatal, explican la intensidad del conflicto social que hoy se vive en el país, y que amenaza con sacavar su sistema democrático y destruir, como últimamente se está viendo con carreteras, oleoductos y redes eléctricas, la infraestructura esencial para su crecimiento económico.

Las posibilidades de evitar una evolución del conflicto social colombiano hacia situaciones endémicas como las de Líbano y El Salvador, dependen de que los grupos dominantes del país (políticos, empresarios y militares) comprendan claramente las falencias del modelo de desarrollo que se ha seguido, y de que tomen medidas de fondo para subsanarlas.

El Gobierno de Betancur (1982-1986), escogió como estrategia básica el perfeccionamiento de la democracia y los diálogos de paz, con el fin de eliminar la violencia política en el país, acompañado de un programa de inversión en las zonas rurales más atrasadas. Con este propósito se fortaleció la autonomía económica y administrativa de los municipios y se estableció la elección directa de los alcaldes, lo que permitió a los partidos de izquierda obtener el control de algunas localidades menores. Desafortunadamente, los problemas básicos que se han descrito en las páginas anteriores no fueron atacados, y el Gobierno de Barco (1986-90) ha visto un recrudecimiento de la violencia de todo tipo (guerrillera, narcotraficante, común) que lo ha forzado a buscar otras soluciones. Se ha modificado la ley de reforma agraria, hasta ahora inoperante, para permitirle al Gobierno una acción más expedita en las zonas de luchas agrarias, para corregir así una de las razones básicas del problema rural, y se está tramitando por primera vez una

ley de reforma urbana que permita atacar el problema de la tierra y la vivienda en las ciudades. Simultáneamente, se ha avanzado en el programa de inversiones públicas en las áreas rurales, dirigido a llevar la presencia del Estado en sus distintas facetas (vías, policía, educación, salud, crédito, etc.), con el fin de arrebatarlas a la guerrilla y al narcotráfico, todo ello enmarcado en un plan de eliminación de la pobreza absoluta en el país, cuya ejecución desafortunadamente marcha muy lentamente debido a la ineficiencia de los organismos estatales encargados de la tarea.

El pié de fuerza militar prácticamente se habrá doblado entre el período de Betancur y el de Barco, lo mismo que su equipamiento y nivel de gasto, con el objeto de poder atender los cuarenta o más frentes de lucha guerrillera en el país. Igualmente, la tendencia es a una acción militar menos defensiva, que quite espacio a la guerrilla, lo que ha generado una respuesta cada vez más violenta por parte de esta última, dirigida fundamentalmente contra las fuerzas armadas.

Se ha desistido por el momento de extraditar a los principales narcotraficantes, ante su campaña de terror sobre el aparato judicial para impedirlo, y se aplaca a los Estados Unidos con una acción fuerte contra los sembrados de coca y marihuana, lo mismo que contra los laboratorios

de producción de cocaína. Ello no sólo golpea al narcotráfico sino que quita fuentes preciosas de ingresos a la guerrilla, lo que la torna otra vez dependiente del secuestro y la extorsión, que han vuelto a proliferar en el país y que han provocado la organización de grupos paramilitares de derecha tan crueles e indiscriminados en su actuar como la guerrilla, tal como se ha visto en las matanzas de poblaciones civiles inculminadas de favorecen a una u otra tendencia.

Simultáneamente, los gobiernos últimos han continuado con el esfuerzo de dotar al país de un sistema educativo con mayor cobertura, de más acueductos y alcantarillados, de una seguridad social más amplia, de un ataque más selectivo al problema de la pobreza, etc. ... Pero la industrialización del país sigue en el mismo 20% del PIB que se había obtenido en 1960, y el sector formal de la economía es cada vez más intensivo de capital, en respuesta a la revolución tecnológica de la microelectrónica, la informática y las comunicaciones. El sector informal sigue absorbiendo la mayor parte de los incrementos de una fuerza de trabajo cada vez más calificada, al paso que las necesidades de inversión siempre mayores de la economía llevan a una concentración creciente de la propiedad de las grandes empresas, que mantiene inalterada la distribución del ingreso extremadamente desigual de Colombia.

En otras palabras, con excepción del esfuerzo por integrar y pacificar las zonas de frontera agrícola , siguen aumentándose los desequilibrios entre la capacitación de la fuerza de trabajo y el bajo nivel de modernización e industrialización de la economía colombiana. Por tanto, las perspectivas para los años noventa sólo parecerían ser de agudización de los conflictos sociales hasta desembocar en una etapa de violenta represión armada por parte del ganador de la guerra civil no declarada que hoy se vive en el país.

5. Una opción para los años noventa

De las páginas anteriores parece desprenderse que, como lo indica la CEPAL en la frase citada al comienzo de este trabajo, el reestablecimiento de la equidad en Colombia va a requerir ocuparse también del modelo económico actual y no solamente del mejoramiento de los indicadores sociales.

Esencialmente, hay que inducir de nuevo una dinámica industrial y de tecnificación de los servicios y la agricultura, orientada a mejorar la productividad y la competitividad internacional. La experiencia ha demostrado que ello requiere mantener un marco macroeconómico estable, en variables tan críticas como el nivel de precios, la tasa de cambio real, la política de comercio externo, el déficit del sector público, los medios de pago, las reservas internaciou

nales, etc. ... Solamente con estabilidad se puede lograr la reorientación hacia el mercado internacional de nuestras economías , que ya no encuentran en su sólo mercado interno un espacio suficiente para continuar su industrialización, pero en función de ventajas comparativas dinámicas y programadas a largo plazo, para lo cual un esquema realista de integración latinoamericana sería un complemento fundamental.

La modernización de la economía colombiana plantea inmediatamente interrogantes sobre cómo evitar que sus beneficios se sigan concentrando en una fracción reducida de la población. De allí que temas tales como la democratización de la propiedad de las grandes empresas, la desconcentración del crédito y la tecnología, y la política de ingresos y salarios, se vuelvan críticos. Si las mejoras en productividad necesarias para permitirle a las empresas colombianas una mayor competitividad internacional no se reparten de manera más equitativa, las raíces del descontento de las clases medias continuarán, y será imposible darle al país una sensación de que su desarrollo es equitativo.

El reto de los años noventa, entonces, es la incorporación creciente y selectiva de nuestros países al mercado internacional, que se construya sobre las estructuras heredadas del pasado adaptándolas a una profunda transformación tecnológica, pero de una manera que disminuya las desigual

dades sociales en lugar de acentuarlas como ahora está ocurriendo, tanto a nivel de grupos como de regiones, lo que a su vez va a exigir una reestructuración del aparato estatal, no para reducirlo sino para concentrarlo de manera eficiente en la creación de infraestructura y en el desarrollo de unos servicios sociales amplios y de calidad.

El creciente automatismo de las grandes empresas industriales, financieras, mineras, etc., tiene que ser acompañado con la creación y estímulo de miles de empresas pequeñas y medianas altamente especializadas, que proporcionen insumos y absorban los productos de las primeras, y en las cuales se pueda ocupar de manera productiva a la fuerza de trabajo cada vez más educada que estamos generando. Simultáneamente, la propiedad de esas grandes empresas tiene que ampliarse entre la población a través de mercados de capitales eficientes en los cuales inversionistas institucionales de tipo solidario (fondos de trabajadores, cooperativas, etc.) y miles de pequeños inversionistas se vinculen a los beneficios del desarrollo tecnológico, y a través de la coordinación del movimiento solidario con el sindical se creen nuevas formas de negociación con el gran capital. Ello implica de paso la democratización de los medios de comunicación de masas, reivindicación que los grupos de izquierda consideran absolutamente esencial para sus aspiraciones políticas.

Adicionalmente, la demanda de trabajadores calificados en los sectores productivos disminuiría la presión sobre el sector público colombiano y permitiría eventualmente su "desclientelización", obligando a una transformación radical en el carácter y estructura de los partidos políticos.

La creación de empleos tecnificados, la distribución de la propiedad y la reestructuración del Estado en el contexto de economías estables y de alta competitividad internacional, son las reales opciones para devolverle a países como Colombia un esquema de crecimiento con equidad, que finalmente elimine los amargos conflictos que hoy la desgarran.

